

ÍNDICE AI: ASA 25/32/98/s

**FECHA DE EMBARGO: 03:00 HORAS GMT DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 1998**

## **República de Corea (Corea del Sur): Los derechos humanos son cruciales para el desarrollo a largo plazo**

**SEÚL** — El presidente Kim debe ir más allá de la retórica si quiere dejar un legado duradero en la situación de los derechos humanos de Corea del Sur, según ha declarado hoy una delegación de Amnistía Internacional que ha visitado el país.

Pierre Sané, secretario general de la organización mundial de derechos humanos, ha manifestado en una conferencia de prensa celebrada en Seúl: «El presidente Kim parece haber perdido la noción de cuál es la auténtica situación de los derechos humanos en Corea del Sur».

«La actitud de su gobierno al no poner fin a los abusos cometidos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, al no liberar a los presos políticos y al no entablar un diálogo significativo con las organizaciones locales de derechos humanos está erosionando rápidamente la confianza en su programa de reformas».

Ayer, el presidente Kim Dae-jung brindó su apoyo a la campaña mundial organizada por Amnistía Internacional para conmemorar el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, el presidente afirmó que él, personalmente, respaldaría la labor de Amnistía Internacional en otros países y llevaría a cabo iniciativas de derechos humanos en la región.

Según Amnistía Internacional, Corea del Sur no debe olvidar que la protección de los derechos humanos empieza por su propio país.

Pierre Sané ha declarado: «Aunque el mundo comprende las especiales características históricas de Corea del Sur y la delicada situación económica que el país atraviesa actualmente, ha llegado el momento de poner fin a las excusas. Es una aberración que una sociedad abierta y desarrollada como la surcoreana siga encarcelando a personas por sus actividades y creencias políticas pacíficas».

«Algunos de esos presos políticos son ancianos y están enfermos, y no constituyen la más mínima amenaza para las leyes o la seguridad surcoreanas. Además, se trata de individuos que se encuentran reclusos exclusivamente por negarse a firmar un compromiso legal inaceptable. Su prolongado encarcelamiento arroja una mancha sobre la conciencia y la reputación internacional de Corea del Sur.»

Aunque Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción por la liberación de muchos presos políticos gracias a amnistías dictadas durante los últimos meses, la organización ha subrayado que aún permanecen encarcelados más de cuatrocientos, la mayoría en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. Pierre Sané ha hecho un llamamiento humanitario especial para que se libere a los presos que llevan largo tiempo encarcelados, y entre los que se encuentran ancianos y enfermos.

El señor Sané ha declarado: «Corea del Sur no sólo mantiene encarcelados a sus presos de conciencia, sino que cada año encarcela a presos nuevos. Desde que el presidente Kim llegó al poder se han llevado a cabo más de 240 detenciones en virtud de la Ley de Seguridad Nacional; de ellas, la

mayoría se han amparado en las vagas disposiciones del artículo 7 y han sido motivadas por actividades políticas pacíficas».

Entre los presos políticos se encuentran estudiantes, activistas juveniles, editores, obreros y otros individuos acusados de formar organizaciones «de izquierdas» y de distribuir folletos o libros socialistas, ya sea en material impreso o a través de Internet. También se han llevado a cabo detenciones por entablar contactos con Corea del Norte, a pesar de la política gubernamental que teóricamente fomenta esos contactos.

Pierre Sané ha reconocido que el gobierno tiene la responsabilidad de mantener la seguridad, pero, según ha dicho, la Ley de Seguridad Nacional va en contra de las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por Corea del Sur.

«La Ley de Seguridad Nacional parece estar fuera de control. Aunque el gobierno afirma que no abusará de esta ley, sigue empleándose de forma generalizada y arbitraria. Según el gobierno, los tribunales ofrecen protección frente a los abusos, pero las absoluciones son muy poco habituales e incluso, en algunos casos, han sido anuladas por el Tribunal Supremo.»

El señor Sané ha manifestado su satisfacción porque, durante su reunión con el presidente Kim, éste aseguró que la Ley de Seguridad Nacional sería revisada en un futuro no muy lejano; el secretario general instó al gobierno a modificar sin demora esta ley para conformarla a las normas internacionales.

Según Amnistía Internacional, también es necesario introducir reformas para garantizar que ya no se toleran la tortura y los malos tratos y que la cuestión de los derechos humanos se incluye en los programas de formación de todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las condiciones de reclusión deben cumplir las normas internacionales.

Pierre Sané ha señalado además que Corea del Sur va en contra de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte. El año pasado, 23 presos fueron ejecutados en un solo día, lo que sitúa a este país entre los grandes verdugos del mundo.

El señor Sané ha manifestado: «Ayer insté al presidente Kim a conmutar, como ex condenado a muerte en cuyo favor muchas personas de Amnistía Internacional y de todo el mundo pidieron clemencia, todas las sentencias de muerte y a tomar medidas para que esta pena sea abolida mientras él ocupa la presidencia».

Pierre Sané ha señalado además que las dificultades económicas están dando lugar a un nuevo tipo de violaciones de derechos humanos en Corea del Sur, a medida que miles de surcoreanos desempleados se han ido quedando sin un medio de vida. Las mujeres y los grupos vulnerables como los trabajadores migratorios son por lo general los más afectados. Los sindicalistas están siendo detenidos de nuevo únicamente por ejercer su derecho legítimo a la huelga, y la expresión pacífica del descontento popular está siendo restringida con medidas draconianas tales como la Ley de Seguridad Nacional.

El secretario general de Amnistía Internacional ha declarado: «La crisis económica que azota la región ha demostrado que un crecimiento económico sólido y sostenible depende de la existencia de un gobierno abierto, de un Estado de derecho, de un régimen de transparencia y rendimient de cuentas y del respeto a la libertad de expresión e información. El garantizar las libertades civiles y

políticas es esencial para conseguir una recuperación económica en Corea del Sur y un desarrollo sostenido a largo plazo».

**Si desean concertar una entrevista o recibir una carpeta de materiales de medios de comunicación, pónganse en contacto con:**

- C OH Wan Ho, AI Corea, teléfono móvil: (+82) 011 512 9645; oficina de la Sección de Corea: 053 426 2533**
- C Eliane DRAKOPOULOS, teléfono móvil: 011 385 0541; Hotel President: (+82) 02 753 3131**

## **LOS DERECHOS HUMANOS SON CRUCIALES PARA EL DESARROLLO A LARGO PLAZO EN COREA DEL SUR**

**Declaración realizada por Pierre Sané,  
secretario general de Amnistía Internacional**

**Centro de Prensa, Seúl, República de Corea  
10 de septiembre de 1998**

**(comprueben este texto con la declaración pronunciada en la conferencia de prensa)**

Este año coinciden dos importantes aniversarios: el 50 aniversario de la fundación de la República de Corea y el 50 aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Desde 1948, Corea del Sur ha experimentado un notable desarrollo económico que ha transformado las vidas de una generación de sus habitantes. Además, el país ha efectuado una transición de un régimen autoritario a una sociedad más democrática y abierta. Sin embargo, la reciente crisis económica y los constantes problemas de derechos humanos deben servir para recordar a todos los surcoreanos que no hay lugar para la autocomplacencia.

Ayer tuve el placer de reunirme con el presidente Kim Dae-jung, quien brindó su apoyo a la campaña mundial organizada por Amnistía Internacional para conmemorar el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Su firma de compromiso, así como las de muchos otros dirigentes y estadistas mundiales y las de millones de personas de todas las regiones y esferas sociales, se entregará al secretario general de la ONU, Kofi Annan, el 10 de diciembre de 1998, Día de los Derechos Humanos.

Conversé con el presidente Kim sobre el positivo papel que Corea del Sur puede desempeñar a la hora de prestar un respaldo internacional a los derechos humanos, respaldo que ha quedado patente en su reciente trabajo para la Corte Penal Internacional. El presidente declaró que él, personalmente, respaldaría la labor de Amnistía Internacional en otros países y llevaría a cabo iniciativas de derechos humanos en la región. En nuestra conversación hablamos específicamente sobre la situación de Myanmar y Timor Oriental, y acordamos que nuestra organización le hará llegar otros casos que nos preocupan.

No obstante, también recordé al presidente que la protección de los derechos humanos empieza por su propio país.

Tengo la sensación de que el presidente Kim ha perdido la noción de cuál es la auténtica situación de los derechos humanos en Corea del Sur. La actitud de su gobierno al no poner fin a los abusos cometidos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, al no liberar a los presos políticos y al no entablar un diálogo significativo con las organizaciones locales de derechos humanos está erosionando rápidamente la confianza en su programa de reformas. Por ello, le insté a reunirse inmediatamente con las organizaciones locales de derechos humanos y con las víctimas de abusos para conocer cuáles son sus preocupaciones.

Aunque el mundo comprende las especiales características históricas de Corea del Sur y la delicada situación económica que el país atraviesa actualmente, ha llegado el momento de poner fin a las excusas. Es una aberración que una sociedad abierta y desarrollada como la surcoreana siga encarcelando a personas por sus actividades y creencias políticas pacíficas.

Algunos de esos presos políticos son ancianos y están enfermos, y no constituyen la más mínima amenaza para las leyes o la seguridad surcoreanas. Además, se trata de individuos que se encuentran recluidos exclusivamente por negarse a firmar un compromiso legal inaceptable. Su prolongado encarcelamiento arroja una mancha sobre la conciencia y la reputación internacional de Corea del Sur.

Aunque Amnistía Internacional ha manifestado su satisfacción por la liberación de muchos presos políticos gracias a amnistías dictadas durante los últimos meses, aún hay más de cuatrocientos que permanecen encarcelados, la mayoría en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. El presidente Kim ha asegurado que tomará en consideración nuestro llamamiento humanitario especial para que se libere a los presos que llevan largo tiempo encarcelados, y entre los que se encuentran ancianos y enfermos.

Corea del Sur no sólo mantiene encarcelados a sus presos de conciencia, sino que cada año encarcela a presos nuevos. Desde que el presidente Kim llegó al poder en febrero se han llevado a cabo más de 240 detenciones en virtud de la Ley de Seguridad Nacional; de ellas, la mayoría se han amparado en las vagas disposiciones del artículo 7 y han sido motivadas por actividades políticas pacíficas.

Entre los presos políticos se encuentran estudiantes, activistas juveniles, editores, obreros y otros individuos acusados de formar organizaciones «de izquierdas» y de distribuir folletos o libros socialistas, ya sea en material impreso o a través de Internet. También se han llevado a cabo detenciones por entablar contactos con Corea del Norte, a pesar de la política gubernamental que teóricamente fomenta esos contactos.

Amnistía Internacional reconoce que el gobierno tiene la responsabilidad de mantener la seguridad, pero hace ya tiempo que a la organización le preocupa el hecho de que la Ley de Seguridad Nacional va en contra de las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por Corea del Sur.

La Ley de Seguridad Nacional parece estar fuera de control. Aunque el gobierno afirma que no abusará de esta ley, sigue empleándose de forma generalizada y arbitraria. Según el gobierno, los tribunales ofrecen protección frente a los abusos, pero las absoluciones son muy poco habituales e incluso, en algunos casos, han sido anuladas por el Tribunal Supremo.

El mejor método que Corea del Sur puede adoptar para garantizar su seguridad consiste en reforzar los cimientos de su sistema político abierto. La eficacia de las leyes de seguridad resulta no sólo menor sino incluso **mayor** si se incorporan a ellas salvaguardias enérgicas para los derechos humanos. El presidente Kim ha declarado que la Ley de Seguridad Nacional será revisada en un futuro no muy lejano. La cuestión es cuántas personas más serán encarceladas antes de que llegue ese momento.

También es necesario introducir reformas para garantizar que ya no se toleran la tortura y los malos tratos y que la cuestión de los derechos humanos se incluye en los programas de formación de todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Las condiciones de reclusión deben cumplir las normas internacionales.

La creación, de acuerdo con las promesas del gobierno, de una comisión nacional de derechos humanos debe mejorar la protección de dichos derechos. No obstante, para que esa comisión sea eficaz y cuente con la confianza de la población, el gobierno no debe elaborar las leyes relativas a ella a puerta cerrada, sino que debe iniciar de inmediato una consulta pública y abierta en la que debe incluir a las organizaciones de derechos humanos.

Corea del Sur va en contra de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte. El año pasado, 23 presos fueron ejecutados en un solo día, lo que sitúa a este país entre los grandes verdugos del mundo.

Ayer insté al presidente Kim a conmutar, como ex condenado a muerte en cuyo favor muchas personas de Amnistía Internacional y de todo el mundo pidieron clemencia, todas las sentencias de muerte y a tomar medidas para que esta pena sea abolida mientras él ocupa la presidencia.

Por supuesto, Corea del Sur atraviesa un momento muy delicado y difícil a causa de la grave crisis económica que azota al país. Sin embargo, precisamente en los momentos como éste es cuando los derechos humanos necesitan una especial protección.

Las dificultades económicas están dando lugar a un nuevo tipo de violaciones de derechos humanos. Varios millones de surcoreanos están viendo cómo se les niegan sus derechos económicos fundamentales, como por ejemplo el derecho a tener un empleo. Las mujeres y los grupos vulnerables como los trabajadores migratorios son por lo general los más afectados. Los sindicalistas están siendo detenidos de nuevo únicamente por ejercer su derecho legítimo a la huelga, y la expresión pacífica del descontento popular está siendo restringida con medidas draconianas tales como la Ley de Seguridad Nacional.

La crisis económica que azota la región ha demostrado que un crecimiento económico sólido y sostenible depende de la existencia de un gobierno abierto, de un Estado de derecho, de un régimen de transparencia y rendimiento de cuentas y del respeto a la libertad de expresión e información.

La Declaración Universal de Derechos Humanos deja claro, y el presidente Kim lo ha reconocido públicamente, que *todos* los derechos humanos —los económicos, los sociales, los civiles y los políticos— tienen la misma importancia. El garantizar esos derechos es esencial para conseguir una recuperación económica en Corea del Sur y un desarrollo sostenido a largo plazo.